Reseña de libros procesales chilenos (N. A.-Z.):	650
—“La prueba ante la jurisprudencia (Derecho civil y procesal civil): Parte general y reglas comunes”, por Emilio Rioseco Enríquez .	650
—“Las causales del recurso de casación en el fondo en materia penal”, por Waldo Ortúzar Latapiat .	653
—“Las medidas para mejor resolver como institución común a todo procedimiento”, por Guillermo Piedrabuena Richard .	655
—“El proceso sumario de cognición (Juicio sumario)”, por Oscar Bojas Aguirre y Raquel Venegas Lagos .	657
—“Comentarios de jurisprudencia sobre el proceso y las partes”, por Francisco Brevis Azócar .	659
—“El juicio ordinario del trabajo y la jurisprudencia”, por Pedro Enríquez Barra .	660

RESEÑA DE LIBROS PROCESALES CHILENOS: *

1) **La prueba ante la jurisprudencia (Derecho civil y procesal civil): Parte general y reglas comunes**, por Emilio RIOSECO ENRIQUEZ. Santiago, "Editorial Jurídica de Chile", 1958. 212 pp.

* *Explicación previa.* La literatura procesal chilena es tan poco conocida en México, que ello justifica iniciemos el recorrido por un par de libros de hace algunos años, en vez de circunscribir el examen, como es habitual, a los de fecha próxima. En efecto, exceptuadas las reseñas que en el número 42 del "Boletín" (1961, pp. 719-23) consagramos a los volúmenes *Las medidas precautorias* (Concepción, 1959), de ROJAS RODRÍGUEZ, y *Derecho procesal del trabajo* (Santiago, 1961), de PEREIRA ANABALÓN (inserta ésta asimismo en "Revista de Derecho, Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Gaceta de los Tribunales", noviembre-diciembre de 1961, "sección bibliografía", pp. 23-4), poco o nada se ha escrito entre nosotros acerca de ella. Por motivos diversos, el procesalismo de Chile, como el de los otros países sudamericanos del Pacífico, marcha con retraso notorio respecto del de las naciones del Atlántico, conforme a la diferencia de nivel procesal que entre unos y otros establecí al comentar el libro de LOVATO sobre *Los medios de prueba* (Quito, 1953), en la "Revista de la Facultad de Derecho de México" (núm. 17-18, enero-junio de 1955, p. 299), y que fue más tarde acogida por CUENCA en *El derecho procesal en Venezuela* (Caracas, 1956), p. 95. El esfuerzo renovador de Manuel URRUTIA SALAS, primero en *Orientaciones del derecho procesal* (en "Actuales orientaciones del derecho"; Santiago, 1942) y luego en su *Manual de derecho procesal* (Santiago, 1949), fue incomprendido en su día por quienes, lejos de apreciar su inquietud y de ayudarle, prefirieron seguir cultivando corrientes doctrinales y sistemas de enseñanza enteramente trasnochados. Es probable —y no lo decimos en tono de censura— que el profesor de Santiago acometiese la empresa antes de tiempo, en ambiente no preparado para entenderla y nada dispuesto al abandono de la sacrosanta rutina. Pero ese tiempo, que al principio le volvió la espalda, ha acabado por darle la razón, y en vísperas del triunfo definitivo de las ideas que él esparció, URRUTIA SALAS puede sentir la legítima satisfacción de haber sido en Chile el primero en dar a conocer las nuevas corrientes y en señalar el camino a seguir. Por fortuna, desde hace algún tiempo las aguas estancadas han comenzado a agitarse, y merced a un grupo de profesores cultos, inteligentes y entusiastas, acaba de crearse el *Instituto Chileno de Derecho Procesal*, llamado a impulsar la investigación y docencia concernientes a nuestra disciplina por

Por razones de derecho positivo harto discutibles,¹ pero consagradas en diversos ordenamientos,² la regulación de la prueba hállase en Chile dividida entre el código civil de 1857, obra famosa de don Andrés Bello, y el de procedimiento civil de 1902 (texto de 1954),³ con la particularidad de que las normas probatorias fundamentales se encuentran de preferencia en aquél y no en éste. Se explica así, hasta cierto punto, que civilistas, como Ríosco, se ocupen de un tema que deberían dejar íntegro a los procesalistas, más familiarizados y dominadores del mismo, sin que al expresarme de este modo ponga ni remotamente en entredicho la capacidad y preparación del profesor de Concepción para realizar con éxito la empresa por él acometida. Por lo demás, el propio autor declara que su libro "no representa un trabajo de investigación", sino "sólo una obra informativa" tendiente a mostrar el estado de la jurisprudencia chilena acerca de la materia (cfr. p. 7). Con tal objeto, se citan más de setecientas sentencias, si bien las comentadas son únicamente trescientas treinta y ocho (cfr. pp. 7 y 191). La técnica elaborativa es siempre la misma y muy sencilla: bajo el epígrafe "doctrina"⁴ se sintetiza la tesis del correspondiente fallo, y como "comentario" se estampan a renglón seguido, en unas cuantas líneas, las consideraciones que su

nuevos y más brillantes derroteros; la reunión constitutiva del mismo, a la que los colegas chilenos tuvieron la deferencia de invitarme, se celebró en Concepción el 18 de julio de 1964, con asistencia de los profesores PEREIRA ANABALÓN, FIGUEROA SERRANO, CALVO CASTRO, VEAS DAZA, VERGARA VERGARA, PECCHI CROCE, ROJÁS RODRÍGUEZ y OBERG YÁÑEZ y adhesión de los también profesores CASARINO VITERBO, HOYOS HENRECHSON, BIANCHI BIANCHI, SALAS QUEZADA y SALAS VIVALDI, habiéndose integrado la comisión organizadora con PEREIRA (presidente), FIGUEROA (secretario), CASARINO, CALVO y VERGARA (vocales) (Una nueva sesión, a la que concurrirían PEREIRA, PECCHI, VERGARA y HOYOS, y a la que igualmente se me invitó, tuvo lugar en Santiago el 28 de octubre, y en ella se encomendó al profesor HOYOS redactar el proyecto de estatutos). Pues bien: dentro de esa situación, todavía de tránsito del *procedimentalismo* al *procesalismo* (cfr. mi *Adición al número 1b del "Sistema" de Carnelutti*, vol. 1 —Buenos Aires, 1944—, pp. 6-9), se encuentran los seis libros de que pasamos a dar cuenta, en todos los cuales se advierte ya, en mayor o menor grado el *conocimiento* de las nuevas tendencias, pero sin que hayan logrado aún la plena *asimilación* de los modernos métodos constructivos.

1 Cfr. LIEBMAN, *Norme processuali nel codice civile*, en "Rivista di diritto processuale", 1948, I, pp. 154-72. Consúltese asimismo CHIOVENDA, *La natura processuale delle norme sulla prova e l'efficacia delle legge processuale nel tempo* (publicado primero en "Foro Italiano", 1912, y luego en sus "Saggi di diritto processuale civile", 2a. ed., vol. I: Roma, 1930), núm. 6, pp. 255-7 (traducción castellana, en "Estudios de Derecho Procesal Civil", vol. I —Buenos Aires, 1949—, pp. 410-3). Por lo demás, la idea de que el estudio de la prueba pertenece al derecho procesal y no al civil la encontramos en autores muy anteriores a LIEBMAN y a CHIOVENDA: cfr. nuestra *Introducción al estudio de la prueba* (en "Estudios de Derecho Probatorio" —Concepción, 1965—, núm. VIII, p. 115, nota 25).

2 Así, entre otros, los de Francia (1803-4: arts. 1315-69), Chile (1857: arts. 1698-1714), España (1888-9: arts. 1214-53) e Italia (1938-42: arts. 2697-2739). En cambio, y con acierto, el código civil mexicano federal y distrital de 1928-32 carece de normas generales sobre prueba.

3 Código civil: véase nota anterior; código procesal civil, libro II, títulos IX-XI, arts. 318-429.

4 En el sentido de "doctrina legal", o sea de jurisprudencia, que tiene en el derecho español, donde los artículos 1691 y 1692 de la ley de enjuiciamiento civil permiten la casación de fondo tanto por "infracción de ley" como de "doctrina legal". Acerca de la compatibilidad o no de dichos preceptos con el texto, posterior, del

lectura suscitó a Ríosoco. Las sentencias acotadas se agrupan en nueve capítulos,⁵ conforme a un orden objetable alguna vez: vemos así cómo el volumen se abre por los “medios de prueba” y cómo, en cambio, su “objeto”, que debería haber figurado a la cabeza, se contempla después de aquéllos y que la carga de probar. Los comentarios, ágiles y concisos, son discutibles en ocasiones: por ejemplo, negar carácter documental a las fotografías (cfr. p. 9), revela tener una idea sumamente restrictiva del documento; ⁶ tampoco “es evidente” (*supra*, nota 1) que la prueba pertenezca por igual al derecho civil y al procesal (cfr. p. 11); el término “acción” (aunque el mal arranque aquí a veces de las sentencias comentadas: cfr. pp. 32 y 69; véanse también la 47 y la 49) se confunde con el de **pretensión**; más que dudoso es que el derecho extranjero, que, de resultar aplicable, integrará la premisa mayor o jurídica de la sentencia, pueda reputarse un mero hecho (cfr. p. 85); ⁷ etcétera. Terreno más firme pisa, por el contrario, el autor cuando, verbigracia, acoge la división de los hechos en constitutivos, impositivos y extintivos (a los que debería haber añadido los modificativos) para explicar la mecánica de la carga de la prueba (cfr. pp. 29-30, si bien en ellas se involucran conceptos tan distintos, cual los de **relación** y **situación** jurídicas); o al destacar que la carga de la prueba no es una obligación (cfr. p. 39), aunque lo diga en forma un poco vacilante; ⁸ o cuando estima que la confesión y los instrumentos son probanzas extrajudiciales en un ulterior proceso (cfr. p. 91); o al reconocer que la Corte Suprema puede casar sentencias en que la valoración de la prueba se haya hecho por el **a quo** de manera arbitraria o antojadiza, que rebase su soberanía al efecto; ⁹ etcétera. En conjunto, el libro reseñado constituye un útil ins-

artículo 6 del código civil, que no menciona entre las fuentes la jurisprudencia, véase lo que decimos en nuestros *Estudios de Derecho Procesal* (Madrid, 1934), pp. 185-6, 290, 318-24 y 377-9.

5 I, Los medios de prueba; II, Prueba judicial y extrajudicial; III, Retroactividad en materia de prueba; IV, Distribución o carga de la prueba (onus probandi); V, El objeto de la prueba (Hechos y actos jurídicos); VI, La prueba y la ley extranjera; VII, Admisibilidad probatoria; VIII, Reglas generales sobre la producción de la prueba y el término probatorio; IX, Valoración de la prueba.

6 A diferencia de la amplia, comprensiva de *instrumenta* y *monumenta*, que encontramos, por ejemplo, en ROSENBERG, *Lehrbuch des Deutschen Zivilprozessrechts*, 2a. ed. (Berlín, 1929), p. 379 (en la traducción, vol. II —Buenos Aires, 1955—, p. 244).

7 Sobre prueba de preceptos jurídicos, véase lo que decimos en: *La prueba del derecho consuetudinario* (en “Revista de Derecho Privado”, Madrid, 15 de mayo de 1934, pp. 145-57; luego en “Estudios”, cit., pp. 429-60, y ahora en “Estudios Der. Probat.”, cit., núm. I, pp. 3-20); *Derecho procesal penal* (en colaboración con LEVENE H.), tomo III (Buenos Aires, 1945), pp. 25-6, y *Examen crítico del código de procedimientos civiles de Chihuahua (Comparado con el del Distrito y Territorios Federales)* (Chihuahua, 1959), núm. 129, pp. 70-1.

8 “La carga de la prueba —se afirma en el lugar citado— es, más que una obligación, una necesidad de las partes...”

9 Para evitar estos abusos, frente a los que, por ejemplo, en España hubo de alzarse el Tribunal Supremo en más de una ocasión, al redactar el *Anteproyecto que reforma el régimen de la prueba en el código de procedimientos de Honduras* (publicado en “Revista de la Facultad de Derecho de México”, núm. 17-18, enero-junio de 1955, pp. 377-452; luego en “Foro Hondureño”, enero-mayo de 1955, pp. 137-89, y ahora en “Estudios Der. Probat. Núm. XIII, pp. 201-90) compusimos un precepto, a tenor del cual, se permitía la casación “cuando de manera notoria se hubiese infringido [en la valoración probatoria] las reglas de la sana crítica aplicables al caso o se hubiese prescindido de su empleo” (cfr. *ob. cit.*, pp. 441 y 443).

trumento de consulta para los profesionales del foro chileno, ya que merced a su acertada composición tipográfica y a los dos excelentes índices de artículos y de materias que lleva al final, permite la rápida localización del dato que interese y brinda, como regla, acerca de su contenido una explicación suficiente y breve.

2) **Las causales del recurso de casación en el fondo en materia penal.** Por Waldo ORTÚZAR LATAPIAT. Santiago de Chile, "Editorial Jurídica de Chile", 1958. 527 pp. (más 12 sin numerar al final).

La casación penal en Chile ofrece rasgos peculiares, y como más salientes estos dos: su acomodamiento a la tramitación que para el recurso establece el código de procedimiento civil,¹ y la posibilidad, que conculca su cometido unificador de la jurisprudencia, de que de ella conozcan, no sólo la Corte Suprema, sino también a veces —y ello asimismo en materia civil— las diferentes Cortes de Apelación.² Agreguemos que en virtud de la supresión de los promotores fiscales, la primera instancia penal reviste caracteres inquisitivos indudables, con un juzgador de actividades múltiples,³ y estaremos en condiciones de comprender la mecánica chilena del medio impugnativo escogido por el autor como tema de su monografía.

Esta representa un esfuerzo extraordinario en la búsqueda, agrupación y comentario de una masa impresionante de jurisprudencia; pero desde el punto de vista constructivo permanece muy apegada al método exegético, sobre todo en su segunda parte,⁴ y la falta de una sistemática adecuada hace que ciertos conceptos se examinen no en uno sino en varios lugares,⁵ con ruptura de la unidad expositiva e incómodas idas y venidas. La información doctrinal tampoco

1 Cfr. art. 535 cód. proc. pen., en relación con el libro III, título XIX, párrafos 1o. y 4o, del de procedimiento civil.

2 Cfr. art. 776 cód. proc. civ., en relación con el 535 cód. proc. pen.

3 El decreto número 426, de 28 de febrero de 1927 suprimió los promotores fiscales y dispuso, entre otras cosas, que "en los casos en que las leyes determinen la intervención del promotor fiscal como parte principal, como acusador público o como denunciante, el juzgado procederá de oficio". Contra semejante supresión se han alzado recientemente los profesores Julio E. SALAS QUEZADA y Julio SALAS VIVALDI en su ponencia *Restablecimiento del ministerio público en la primera instancia del juicio criminal y creación en dicho juicio de jueces instructores y jueces sentenciadores*, en "Revista de Derecho y Ciencias Sociales" de la Universidad de Concepción, núm. 128, abril-junio de 1964, pp. 181-3, así como el "Instituto de Ciencias Penales" en la sesión de mesa redonda (relator, Rubén GALECIO) que el 29 de octubre de este año dedicó al tema del ministerio público, dentro del ciclo sobre *Orientaciones para una reforma del proceso penal en Chile*.

4 Aparte el "Prólogo" de LABATUT (p. 5), la obra que comentamos abarca un capítulo de "Generalidades" (núms. 1-10; pp. 7-29), una parte primera, relativa al "Estudio de las causales en general" (núms. 11-142; pp. 31-294); una parte segunda, referente al "Estudio de las causales en particular" (núms. 143-255; pp. 295-527), y la "Bibliografía" (pp. 1-4 sin numerar).

5 Verbigracia: cosa juzgada (núms. 113, 119 y 201), perdón del ofendido (núms. 114, 120 y 202), amnistía e indulto (núms. 115, 121 y 203-4) y prescripción de la acción penal (núms. 116, 122 y 205).

es muy completa,⁶ y llama poderosamente la atención que la magna obra de Calamandrei sobre la materia, traducida desde 1945 al castellano, no se haya consultado para nada.⁷

Señaladas las fallas, imputables más que Ortúzar, al estado de los estudios procesales en Chile durante la época que pudiéramos llamar de los **patriarcas bíblicos**, y que, por fortuna, está a punto de clausurarse, destaquemos que por razón de su contenido (recurso de fondo y no de forma) y del enfoque que el autor le ha dado, el libro interesa por igual a penalistas y a procesalistas penales, y acaso más a los primeros que a los segundos, por lo menos en capítulos como el II de la parte primera⁸ o cual el I de la parte segunda.⁹

Como señala el profesor Gustavo Labatut G. en su prólogo (p. 5), "dos reformas estima el señor Ortúzar indispensables y fundamentales: el establecimiento de la casación en el fondo de oficio y el reemplazo de la enumeración taxativa de las causales por una fórmula amplia, como medio de que la Corte de Casación pueda enmendar todos los errores de derecho que contienen los fallos penales que revisa". En orden al primer extremo,¹⁰ creemos que sólo en contados casos y con especiales cautelas debe permitirse al juzgador, sujeto del juicio, convertirse en sujeto de la acción (a saber: de la impugnativa), puesto que los recursos son esencialmente actos de parte.¹¹ (Por la misma razón

6 Véase la bibliografía de las pp. 1-4 sin numerar, en las que comienzan por incluirse textos que habitualmente no se mencionan en ellas: así, los códigos de Alemania, Austria, Holanda, Bélgica y Perú, o bien revistas de las que sólo se brinda el título y no los artículos correspondientes. Otros errores: a) el libro que compuse con LEVENE H., no se denomina "Derecho procesal penal de la Capital Federal (Argentina)", sino como se indica en la nota 7 de la reseña 1; b) el "Derecho procesal criminal" que figura como si fuese únicamente de GARCÍA VALDES, es en su primera y fundamental parte obra mía, víctima de una de tantas manifestaciones de la piratería editorial franquista; c) de MANZINI se ha utilizado la edición de su "Trattato" de 1920, anterior, por ende, al actual código procesal penal italiano de 1930; d) de Italia se cita el código procesal penal de 1865 y no el de 1930; e) otro tanto sucede con el Perú: referencia al código de 1873 y no al de 1939; etcétera.

7 Aludimos a *La cassazione civile*, 2 vols. (Torino, 1920); traducción en tres vols., con prólogo nuestro: Buenos Aires, 1945. Si se ha consultado, en cambio, *La génesis lógica de la sentencia civil*, a través de la traducción inserta en las pp. 367-417 de los "Estudios sobre el proceso civil" de CALAMANDREI (Buenos Aires, 1945) (originariamente publicada en la "Rivista critica di scienze giuridiche" —Firenze, 1914—, núm. 5, y después en sus "Studi sul processo civile" vol. 1 —Padova, 1930—, pp. 1-51).

8 "Condiciones o requisitos substantivos de las causales": núms. 21-82, pp. 62-189.

9 Concerniente al error de derecho (núms. 143-166, pp. 297-318), contemplado en sus tres tipos: "error al determinar la participación que ha cabido al reo en el delito; error al calificar los hechos que constituyen circunstancias agravantes, atenuantes y eximentes de responsabilidad penal; y error al fijar la naturaleza y el grado de la pena": *ob. com.*, p. 297.

10 Cfr. *ob. com.* núms. 70-75, pp. 165-74.

11 En Chile subsiste, sin embargo, la *consulta* en materia penal (cfr. arts. 533-4 cód. proc. pen.): acerca de ella y de figuras afines a la misma, véanse las indicaciones que hacemos en *Derecho proc. pen.*, cit., tomo III, pp. 313-5; *Nombre, extensión técnica legislativa y sistemática del anteproyecto*, en "Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia", núm. 47-48, julio-diciembre de 1950, pp. 73, 77 y 85, y reseña del libro de BUZAID, *Da apelação ex officio no sistema do processo civil* (São Paulo, 1951), en "Revista de la Facultad de Derecho de México", núm. 1-2, enero-junio de 1951, pp. 321-2. Sobre la distinción entre "sujetos de la acción" y "sujeto del juicio", cfr.

—añadimos— carecen también de razón de ser los preceptos del código procesal penal chileno —cfr. arts. 528 y 548— que autorizan la **reformatio in pejus**). En cuanto al segundo punto,¹² habrá de afinarse mucho en la redacción del motivo oportuno, a fin de evitar que se acuda a la casación sin ton ni son, es decir, no deberá bastar una cualquier infracción de ley, aunque sea **evidente**, sino que hará falta, además, que resulte **trascendente** para la decisión del litigio.

3) Las medidas para mejor resolver como institución común a todo procedimiento.

Guillermo PIEDRABUENA RICHARD, Santiago de Chile, "Editorial Jurídica de Chile", 1960, 134 pp.

Con el nombre que el autor les da, proveniente del artículo 159 del código procesal civil chileno, o con el de **providencias para mejor proveer**, que reciben en España, trátase de un mecanismo difundido en los enjuiciamientos de raíz hispánica —aun cuando en México haya sido objeto de una más moderna y acertada ordenación—¹ y que en Chile se extiende también al ámbito de la justicia penal, en virtud de la función supletoria que respecto de ella cumple el texto regulador del procedimiento civil.²

Dos partes distintas, tanto en longitud como en orientación, abarca el libro de Piedrabuena: en la primera (pp. 9-39), sin rúbrica, se efectúa, en dos capítulos, que sí llevan epígrafe,³ el examen de la figura desde el doble ángulo de su fijación conceptual y teleológica (inclusive algunas indicaciones de derecho extranjero)⁴ y de su trayectoria histórica (proceso romano-canónico —en rigor, una referencia tan sólo a la **Partida** III, título II, ley 11—; leyes de enjuiciamiento civil españolas de 1855 y 1881; proyectos chilenos de 1861, 1867 y

CARNELUTTI, *Lezioni di diritta processuale civile*, vol. II (reimpresión: Padova, 1930), núms. 91-3, y *Sistema di diritto processuale civile*, vol. I (Padova, 1936), núm. 133 (vol. II en la traducción: Buenos Aires, 1944).

¹² Cfr. *ob. com.*, núms. 8 y 82, pp. 21-2 y 187-9.

¹ Véanse nuestros trabajos *Alcance del artículo 279 del código procesal civil del Distrito Federal* y *A propósito de las facultades de los artículos 278 y 279 del código procesal civil del Distrito Federal*, en el volumen "Clínica Procesal" (México, 1963), pp. 341-5 y 357-61, respectivamente.

² Véanse, con carácter general, el artículo 43 y, con alcance específico, los artículos 5, 186, 245, 399, 489, 513, 526, 535 y 537 del código de procedimiento penal de 1906 (texto de 1944).

³ En realidad, la primera parte no carece de rúbrica, aunque produce esa sensación, por haberse omitido en el índice (véase p. 131) y hallarse fuera de lugar en el comienzo de la obra (cfr. p. 9). Su enunciado es: "Introducción al estudio de las medidas para mejor resolver"; y el de los capítulos, éste: "I, La institución de las medidas para mejor resolver: su posición doctrinaria (pp. 9-32); y II, Breve síntesis histórica de la institución de las medidas para mejor resolver en el proceso civil chileno" (pp. 32-9).

⁴ Tomadas casi todas, según se reconoce (*ob. cit.*, p. 32, nota 32) del *Derecho procesal civil* de REIMUNDÍN, tomo I (Buenos Aires, 1956), pp. 120-3. Aclaremos que el precepto que como artículo 79 del código procesal civil mexicano del Distrito se transcribe en la página 32, pertenece, en rigor, al *Federal*, aun cuando coincida casi a la letra con el 276 de aquél. El error señalado se encuentra en REIMUNDÍN (*ob. cit.*, p. 125), y una vez más confirma, ahora en el caso de ENRÍQUEZ BARRA, los peligros de las referencias de segunda mano.

1888-93, hasta desembocar en el código vigente), mientras que la segunda (pp. 40-128) está consagrada al estudio de las susodichas medidas en el cuadro del derecho positivo de Chile, a lo largo de cuatro capítulos que sucesivamente se ocupan: 1º, del esencial artículo 159 del código procesal civil (pp. 40-72); 2º, de las medidas para mejor resolver en la esfera de los procedimientos especiales, tanto contenciosos como voluntarios,⁵ pero, por supuesto, sin detenerse en todos ellos, numerosísimos en Chile,⁶ y sí sólo en las peculiaridades que al efecto presentan en algunos de los mismos (pp. 73-82); 3º, de las diversas medidas probatorias previstas por el citado artículo 159 (pp. 83-115), y 4º, de las medidas para mejor resolver en segunda instancia, así como de los recursos contra ellas en primero o en segundo grado (pp. 115-128).

Dos aspectos llaman, sobre todo, la atención en el volumen que acabamos de describir: uno, la tan distinta tonalidad científica de sus dos partes y otro, la flagrante y perturbadora ruptura sistemática que se advierte en la segunda de ellas.

En el primer sentido, el esfuerzo investigador de índole doctrinal resulta muy superior en las páginas 9 a 39 que en las siguientes. Bajo el influjo principalmente de Guasp⁷ y de Couture —aunque acerca de éste llame mucho la atención que Piedrabuena no haya utilizado para nada ni mencione siquiera la monografía del maestro uruguayo sobre el tema—⁸ y, en menor medida, de Sentís Melendo⁹ y de algunos otros procesalistas (Casarino Viterbo, Chioventa, Reimundín, etcétera), el autor enfoca bien la institución desde el doble ángulo del principio inquisitivo y del régimen de la prueba.¹⁰ En cambio, en la parte segunda Piedrabuena se cife de manera excesiva y hasta exclusiva

5 Aun cuando el código procesal civil chileno haya eludido la referencia a éstos y se contente con hablar, en su libro IV, de "actos judiciales no contenciosos".

6 Sólo en el código procesal civil encontramos 49 títulos relativos a juicios y procedimientos especiales, distribuidos así: *libro I, diez* (títulos VIII-XVI y XIX, § 2); *libro II, cuatro* (títulos II-V); *título III, veinte* (títulos I-XX), y *libro IV, quince* (títulos I-XV). Aun sin contar otros procedimientos (juicio ordinario, apelación, ejecución y probatorios), así como también los contenidos en los códigos civil y de comercio o en leyes especiales, como quiera que algunos de esos 49 títulos regulan más de un procedimiento, se llegaría, en principio, a un total de 63, que quedan en 60 si restamos los recursos de casación y de revisión, que unidos al de apelación integrarían la fase impugnativa del procedimiento ordinario, y el juicio sobre distribución de aguas, derogado por el código de aguas de 1951.

7 En sus libros *Juez y hechos en el proceso civil* (Barcelona, 1943) y *Comentarios a la ley de enjuiciamiento civil*, vol. I (Madrid, 1943). (En la 2ª ed. de éstos —Madrid, 1948—, se ocupa de los arts. 340-2 en las pp. 876-92 del tomo 1).

8 Aludimos a su *Teoría de las diligencias para mejor proveer* (Montevideo, 1932). Las obras de COUTURE utilizadas por PIEDRABUENA han sido los *Fundamentos del Derecho Procesal Civil*, 3ª ed. (Buenos Aires, 1958), y la *Introducción al estudio del proceso civil* (Buenos Aires, 1953).

9 En sus artículos *Medidas para mejor proveer: El problema de su apelabilidad según nuestra jurisprudencia*, en "Revista de Derecho Procesal" argentina, 1944, II, pp. 126-44, y *Las diligencias para mejor proveer en el anteproyecto Reimundín*, en rev. cit., 1948, I, pp. 172-83; reproducidos luego por su autor en "Teoría y práctica del proceso: Ensayos de derecho procesal", tomo III (Buenos Aires, 1959), pp. 211-36 y 237-47, respectivamente.

10 Aun cuando no siempre estas medidas se decreten de oficio, ya que a veces recaen asimismo a instancia de parte: cfr. nuestro trabajo *Prueba anticipada y prueba*

a las disposiciones legales y a la jurisprudencia, si prescindimos de media docena de citas de Manresa y de Anabalón.¹¹ Tan patente es la discrepancia de orientación entre ambas partes, que mientras la primera podríamos encajarla dentro de los cánones del **procesalismo**, la segunda permanece de lleno en los cauces del **procedimentalismo**.

La otra de las objeciones anunciadas estriba en haber interrumpido la exposición concerniente al artículo 159, para entre los dos capítulos (I y III) que a él atañen intercalar uno relacionado con los procedimientos especiales, que habría debido colocarse al final del trabajo.

Por último, algunas deficiencias afean la lista bibliográfica que figura en las páginas 129 y 130.¹²

4) **El proceso sumario de cognición (Juicio sumario)**, por Oscar ROJAS AGUIRRE y Raquel VENEGAS LAGOS. Santiago de Chile, "Editorial Jurídica de Chile", 1963, 182 pp.

Entre los numerosos "juicios especiales" del código procesal civil en su libro tercero¹ hay uno, objeto de su título undécimo (arts. 680-92), que recibe el nombre de "procedimiento sumario" y que es (cfr. pp. 140-63) el fundamentalmente tenido en cuenta por los autores de esta monografía. Ahora bien: el legislador chileno, que a todo lo largo del mencionado código mezcla a capricho los términos "juicio" y "procedimiento", sin haberse preocupado una sola vez de deslindarlos,² en parte alguna (y menos aún en el susodicho título undéci-

retardada en el proceso español, en "Estudios Der. Probat.", cit., Núm. x, pp. 183-6. En Cuba, las diligencias para mejor proveer pueden, o podían, ser pedidas al juzgador por los litigantes, en virtud de reforma introducida por la ley de 8 de marzo de 1938 en la de enjuiciamiento civil de 1886, que es sustancialmente la española de 1881.

11 Correspondientes las de MANRESA (*Comentarios a la ley de enjuiciamiento civil*, tomo II; Madrid, 1919) a las pp. 57, 61, 74, 77 y 88 del libro reseñado y las de ANABALÓN (*Tratado práctico de derecho procesal civil chileno* —Santiago, 1946— y *El juicio ordinario de mayor cuantía* —Santiago, 1954—) a las pp. 61, 93 y 114. Destaquemos que a la primera parte, con 31 pp., pertenecen 41 notas, mientras que la segunda, con 89 de aquéllas, contiene sólo 74 de éstas, de las cuales 58 son citas de jurisprudencia.

12 La ordenación debió haberse efectuado colocando primero los *apellidos* y luego el *nombre* y no, como se ha hecho, al revés; los apellidos aparecen a veces incompletos (así, "Menéndez P.", por Menéndez Pidal; "Urrutia S.", por Urrutia Salas "Sentis M.", por Sentis Melendo) o mal transcritos (Goldsmidt", por Goldschmidt; "Reimundi", por Reimundín); el pie de imprenta no siempre se indica con exactitud (verbigracia, la *Teoría General del proceso* de GOLDSCHMIDT se edita por "Labor" y no por "Edit. Ibero-Americanos"; y el *Derecho procesal civil* de REIMUNDÍN no ve la luz en "Madrid", sino en Buenos Aires).

1 Comprensivo nada menos que de veinte títulos, varios de ellos (a saber: I, IV, VI, VIII, XIV y XIX), además, con una pluralidad de procedimientos. Más datos, *supra*, nota 6 de la reseña 3ª.

2 Concretándonos al libro III, vemos que su título I "habla del *juicio ejecutivo* en las obligaciones de dar" (sin perjuicio de valerse luego en su § 1º de la rúbrica "procedimiento ejecutivo"), mientras que el II lo hace "del *procedimiento ejecutivo* en las obligaciones de hacer y de no hacer", es decir, utilizan los dos vocablos como rigurosamente sinónimos, cuando distan muchísimo de serlo; la misma confusión se advierte si más adelante enfrentamos, verbigracia, el título VIII (Del *juicio arbitral*) y el XI ("Del *procedimiento sumario*").

mo) habla de "proceso sumario de **cognición**", vocable el último que si bien acodido en los diccionarios de nuestra lengua, había caído por completo en desuso en España —y supongo que también en Chile—, para ser constantemente reemplazado por "conocimiento". Su resurrección reciente en los dominios procesales obedece a tres factores que Rojas Aguirre y Venegas Lagos deberían haber evocado o invocado para justificar el cambio de nomenclatura introducido por ellos: el primero lo ha sido, sin duda, la difusión en los medios jurídicos hispanoamericanos de la doctrina, proyectos y códigos procesales italianos —y junto a ellos, por estar redactado en este idioma, el de procedimiento cil del Vaticano—,³ en los cuales "cognizione" esa palabra generalizada y de gran relieve;⁴ el segundo, probablemente derivado del que acabamos de señalar, la exhumación que del término "cognición" hizo el nuevo régimen de la justicia municipal española,⁵ y el tercero, único tenido en cuenta por los autores (cfr. p. 37), su ejemplo por Guasp, el tratadista que en unión del uruguayo Couture y del chileno Pereira Anabalón más ha influido en la gestación de la obra reseñada.⁶

Como sucede con frecuencia entre quienes empiezan, la pareja redactora ha arrancado de muy lejos: de Adán y Eva, como suele decirse. Así, toda la **introducción** (pp. 5-35) —donde bajo el epígrafe "proceso y jurisdicción" se formulan consideraciones acerca de tales conceptos y, **además**, sobre los de acto procesal, sujetos del proceso, relación jurídica y presupuestos procesales y **todavía**, no contentos con ello, se añade una síntesis histórica del proceso civil desde el romano y el germánico al actual de Francia, Italia y España— se debió haber suprimido, porque resulta sobremanera superficial, brinda un panorama a todas luces incompletísimo acerca de la naturaleza del proceso (la doctrina de la relación jurídica dista mucho de ser indiscutible o única)⁷ y se reduce casi siempre a la transcripción o al resumen de ideas y pasajes ajenos. También a propósito de los principios inspiradores del procedimiento sumario (concentración, inmediatividad, oralidad, etcétera) habría habido que efectuar cortes, para eliminar

3 Acerca del mismo, véanse mis dos trabajos siguientes: *Ley de organización judicial y código de procedimiento civil de la Ciudad del Vaticano*, en este "Boletín", núm. 2, mayo-agosto de 1948, pp. 27-37, y *Código modelo y modelo de códigos: el de procedimiento civil para la Ciudad del Vaticano*, conferencia dada en la Pontificia Universidad Católica de Santiago el 14 de agosto de 1964 (repetida el 1º de octubre en la "Fundación de Cultura de Concepción"), actualmente en prensa.

4 Evoquemos tan sólo el ejemplo de CARNELUTTI, que asienta sobre el contraste entre *cognizione* y *esecuzione*, tanto sus famosas *Lezioni di diritto processuale civile* (Padova, 1919-31), como su originalísimo *Progetto del codice di procedura civile*, etcétera. (Padova, 1926), editado en dos folletos: *Parte Prima: Del processo di cognizione* (arts. 1-426) y *Parte Seconda: Del processo di esecuzione* (arts. 427-720).

5 Véanse la ley de 19 de julio de 1944 (base 10), el decreto de 24 de enero de 1947 (arts. 2, 3 y 8), la ley de 17 de julio de 1948 (art. 1) y los decretos de 21 de noviembre de 1952 (art. 1 del primero de ellos y, especialmente, el preámbulo y los arts. 26-68 del segundo).

6 De GUASP, el *Derecho procesal civil* (Madrid, 1956); de COUTURE, los *Fundamentos* y la *Introducción* (*supra*, nota 8 de la reseña 3ª); y de PEREIRA ANABALÓN, el volumen citado en la "Explicación previa", así como *La cosa juzgada formal en el procedimiento civil chileno* (Santiago, 1954) y *Apuntes de derecho procesal civil* (versión mimeografiada; Santiago, 1962).

7 Véase nuestro artículo *Algunas concepciones menores acerca de la naturaleza del proceso*, en "Revista de Derecho Procesal" argentina, 1952, I, pp. 212-77.

o condensar desarrollos **genéricos**, que redundan en detrimento de los **específicos**, opacados con frecuencia por aquéllos. En fin, la sistemática incurre más de una vez en zig-zags perturbadores,⁸ sin contar con que la síntesis histórica del proceso sumario, elaborada principalmente tras las huellas del español Fairén Guillén,⁹ se ha llevado no al capítulo introductivo, que era el indicado, sino casi al final del volumen (cfr. pp. 133-40).

Es una lástima que los reparos mencionados, explicables entre principiantes, pero que de perseverar en tareas investigadoras habrán de poner especialísimo cuidado en corregir, desluzcan en parte el que, sin ellos, habría constituido un análisis excelente del juicio sumario chileno a través de sus diferentes etapas,¹⁰ con especial detenimiento en la de prueba (pp. 85-105), y de acuerdo con los diversos principios que lo inspiran.

5) **Comentarios de jurisprudencia sobre el proceso y las partes**, por Francisco BREVIS AZÓCAR. Concepción, "Universidad de Concepción: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales", 1964, 112 pp.

Una preposición mal empleada¹ induce a suponer que los comentarios en cuestión provienen de la jurisprudencia, cuando en rigor conciernen a ella y emanan del autor.² Objeción de mayor trascendencia es la que en su voto aprobatorio formula el profesor Herrera Reyes, al estimar que un trabajo como el realizado por Brevis Azócar no encuadra "dentro del concepto tradicional de una tesis de licenciado" (p. 5), o sea de una **memoria de prueba**, a tenor del nombre con que usualmente se conocen en Chile. En efecto, el autor no ha intentado alzar una construcción por cuenta propia, desde el plan hasta las conclusiones, sino que se ha limitado a recopilar un cierto número de sentencias de los tribunales chilenos y a examinarlas conforme al sencillo método cons-

8 Verbigracia, en orden a la valoración de la prueba (examinada, por un lado, en las pp. 71-4 y luego en las 100-5) o a la impugnación (pp. 74-8 y 119-28, respectivamente).

9 En su libro *El juicio ordinario y los plenarios rápidos* (Barcelona, 1953).

10 Aun cuando discrepemos del autor en que se reduzcan a las de conocimiento, juzgamiento y ejecución, y menos todavía podemos aceptar que ellas constituyan "la ya clásica (*sic*) división del proceso" (cfr. p. 107). Bueno será, ante todo, que se deje en paz el calificativo *clásico* en los dominios procesales, utilizado en ellos con insuperable vaguedad y que unos refieren al enjuiciamiento romano, singularmente al formulario; otros a expositores del siglo XIX, como CARAVANTES o MANRESA, sin faltar quien lo aplique a CHIOVENDA y CALAMANDREI (así, CARNELUTTI, que a la vez se cataloga como *romántico*: cfr. su necrología de Piero Calamandrei, en "Rivista di diritto processuale", 1956, I, p. 261). Más importante es, sin embargo, recalcar que las fases son más de tres y que el juzgamiento representa tan sólo una etapa de la conclusiva; véase lo que decimos en *Derecho proc. pen.*, cit., tomo II, pp. 121-2, y en *Proceso, autocomposición y autodefensa* (México, 1947), núm. 72, pp. 119-20.

1 Recordemos, a título anecdótico y como demostración de las dificultades que su correcto uso entraña en ocasiones (nada digamos de los problemas que suscitan en el aprendizaje y traducción de idiomas), la duda que se atribuye a Pío BAROJA, cuando no sabía si estaba *en, de o con zapatillas*.

2 El equívoco, por tanto, se habría evitado con hablar sólo de "Comentarios a la jurisprudencia sobre el proceso y las partes".

tractivo con anterioridad empleado, por ejemplo, por RIOSECO ENRIQUEZ en el volumen de que dimos cuenta (*supra*, núm. 1). Pero si prescindimos de esos dos reproches, o mejor dicho: del segundo, dada la insignificancia del primero,³ resulta también indudable que en otras direcciones la *memoria* de Brevis Azócar merece elogios. Por de pronto, las ejecutorias son comentadas con mucha más extensión que las del citado libro de Ríoseco, donde se contemplan 338 fallos (en volumen, además, cuyo formato es exactamente la mitad del que ahora reseñamos), mientras que nuestro autor se enfrenta con 60 decisiones tan sólo.⁴ En segundo término, la jurisprudencia aparece agrupada con criterio sistemático en cuatro *capítulos*,⁵ el último de los cuales dividido en tres *párrafos*,⁶ de la misma manera que, a su vez, el postrero de éstos en tres *secciones*,⁷ y en definitiva en un total de 56 *números* (véase la nota 4). En tercer lugar, el comentario no se reduce a la glosa o aclaración de la sentencia correspondiente, sino que, en mayor o menor medida, su contenido se enfoca con criterio doctrinal (literatura hispanoamericana y obras italianas y alemanas traducidas) y con ánimo de encajar el concepto o institución alrededor del cual gire, en el lugar que dentro del derecho procesal le pertenezca.

6) **El juicio ordinario del trabajo y la jurisprudencia**, por Pedro ENRIQUEZ BARRA. Concepción, "Universidad de Concepción: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales", 1964, 112 pp.

"Memoria de prueba", como la antes reseñada de Brevis Azócar, la que ahora tenemos entre manos se asienta, por un lado, en los datos jurisprudenciales recogidos en tres o cuatro libros y en un par de revistas, chilenos los unos y las otras,¹ y, por otro, en una bibliografía sobremanera reducida en número

3 Mayor trascendencia tiene la insostenible afirmación de que "la palabra proceso es de origen reciente, incorporada a la terminología jurídica por la doctrina italiana" (p. 11). Por principio de cuentas, mucho antes que en ésta la encontramos en la alemana; en pleno siglo XVII la utiliza CALDERÓN DE LA BARCA en *El alcalde de Zalamea* (1651) (cfr. jornada III, escena xv), y con facilidad podría retrocederse a tiempos más lejanos.

4 La diferencia entre esta cifra y la de 56 números en que su análisis se realiza, obedece a que cuatro de éstos se extienden a más de una sentencia, a saber: el 5 y el 15 a dos y el 11 a tres. Esos fallos provienen en su gran mayoría (42) de la Corte Suprema, distribuyéndose los siguientes así: Corte de Apelaciones de Santiago, 12; idem de Chillán y de Valdivia, 2 de cada una; idem de Talca y de Valparaíso, 1 de cada una.

5 *I*, Concepto de juicio; *II*, De la acción; *III*, De la relación procesal, y *IV*, De las partes.

6 *Primero*: De las partes principales o directas; *Segundo*: De la pluralidad de partes o litisconsorcio; y *Tercero*: De las partes indirectas, secundarias o terceros.

7 *I*, De los terceros coadyuvantes; *II*, De los terceros excluyentes, y *III*, De los terceros independientes. Sobre el tema de las tercerías en el derecho chileno, véase el volumen de Sergio RODRÍGUEZ GARCÉS, *Tercerías: Intervención de terceros en los diversos procedimientos* (Santiago, 1953).

1 Baste destacar que de la obra de DÍAZ NATES (*El procedimiento de los juicios de trabajo ante la jurisprudencia*; Santiago, 1941) provienen, pese a distar mucho de ser reciente, 107 notas; 91 del *Código del Trabajo* en las ediciones a cargo de DÍAZ SALAS y de RUIZ DE GAMBOA, y 53 de la "Revista de Derecho y Jurisprudencia", o sea 251 en conjunto, sobre un total de 304.

(cfr. p. 109) y de muy endeble calidad, si exceptuamos la obra de Pereira Anabalón,² y sin que el autor hay considerado nunca necesario acudir a literatura distinta de la de su patria, ni siquiera a la traducida al castellano.³ Unos pocos botones de muestra tomados al azar, mostrarán hasta qué punto el trabajo se resiente de esa falta de cimiento doctrinal suficiente: **a)** como **rasgos peculiares del proceso laboral** se consignan varios (cfr. pp. 11-2) que concurren en procedimientos de otras ramas, sin excluir, por supuesto, la civil; **4 b)** como concepto de **notificación** no se ha encontrado nada mejor ni más moderno que el de Eseriche, y aun él, no de manera inmediata, sino en virtud de cita imprecisa de segunda mano,⁵ o sea por intermedio de Anabalón Sanderson (cfr. p. 21); **c)** todavía más atrás en el tiempo se llega a propósito de la prueba, acerca de la cual se acoge la definición de las **Partidas**,⁶ a través nuevamente de Anabalón Sanderson (cfr. p. 51), como si la consulta directa del código alfonsino y del **Diccionario** de Eseriche resultasen inaccesibles en Chile; **7 d)** cree el autor, a pie juntillas, que la **confesión** sigue siendo la reina de las pruebas,⁸ con olvido de que la de carácter vinculativo ha desaparecido ya de diversos ordenamientos y ha cambiado su fisonomía en otros;^{9 e) la **consagra-**}

2 Es decir, su *Derecho procesal del trabajo*: véase *supra*, "Explicación previa".

3 Llama sobre todo la atención que no se haya tenido para nada en cuenta el *Derecho procesal del trabajo* de DE LITALA (traducción de SENTÍS MELENDO y adiciones de derecho argentino de Diego LAMAS), en tres volúmenes (Buenos Aires, 1949), con tanto más motivo cuanto que se encuentra en la Biblioteca de la Facultad de Derecho de Concepción.

4 Según el autor, "las características del derecho procesal del trabajo en Chile son: 1, procedimiento rápido y acelerado; 2, El juez tiene un rol (léase, un papel; "rol" posee en castellano otro significado) activo; 3, Se aparta del rigorismo y formalismo clásico (véase *supra*, nota 10 de la reseña 4a.); 4, Es un procedimiento especial, pero distinto de los procedimientos especiales que encontramos en el código de procedimiento civil". Pues bien: la lectura de cualquier código procesal civil, comenzando por el chileno, muestra que en ellos existen procedimientos con los rasgos de los números 1o. a 3o., inclusive más acentuados que los del juicio de trabajo en Chile; y en cuanto al 4o., recordemos que en Alemania, si bien existen tribunales laborales, las correspondientes contiendas se substancian según normas procesales civiles, modificadas en algunos puntos por la ley de tribunales laborales de 1946 (cfr. SCHÖNKKE, *Zivilprozessrecht*, 7a. ed., Karlsruhe, 1951, pp. 446-8; traducción española de la 5a. ed. alemana, Barcelona, 1950, pp. 393-6) y que en Italia ellas se rigen por el código de procedimiento civil de 1940 (libro II, título IV, arts. 409-73).

5 Localizable, puntualizamos, en el *Diccionario de legislación y jurisprudencia*, nueva ed. (París, 1876), pp. 1341-2 (véase *infra*, nota 7). La primera edición de ESCRICHE es de París, 1831.

6 A saber —puntualizamos de nuevo—: la contenida en la *Partida III*, título XIV, ley 1a.

7 Ambas obras se encuentran en la Biblioteca de la Facultad de Derecho de Concepción, donde las hemos utilizado para puntualizar las citas de las dos notas precedentes.

8 "Alguien (*sic*) ha dicho que la confesión es la reina de las pruebas. Nada más cierto" (*ob. com.*, p. 71). Pues bien: nada más incierto en nuestros días, comenzando por el proceso civil, donde su trono lo ocupa, desde hace mucho tiempo, la documental.

9 Cfr. GLÜCKLICH, *Parteiübernehmung nach deutschem Zivilprozessrecht* (Berlín, 1938), pp. 31-49, así como nuestra reseña de tal libro en "Revue internationale de la théorie du droit", 1939, núm. I, p. 149 (luego en nuestros "Ensayos de Derecho Procesal" —Buenos Aires, 1944—, pp. 627-8, y *Examen código Chihuahua*, cit., núm. 133, pp. 73-4.

ción de todo un capítulo, aunque corto (pp. 77-9) a las **medidas para mejor resolver**, no ha bastado para que el autor considerase necesario echarle un vistazo siquiera al libro chileno a ellas dedicado por Piedrabuena Richard (*supra*, núm. 3); f) aun cuando también se destina un capítulo íntegro a la **apreciación de la prueba** (pp. 80-9), tampoco Enríquez Barra se ha cuidado de informarse con exactitud acerca de las distintas pautas para llevarla a cabo;¹⁰ etcétera.

En definitiva, el empeño del sustentante no ha alcanzado el nivel apetecible, como consecuencia de haber sido dirigida su tesis por laboristas, a quienes ni en Concepción ni en parte alguna cabe pedir que dominen los temas procesales en la medida de los verdaderos procesalistas, pero a los que sí debe exigirse que cuando una memoria vaya a versar sobre enjuiciamiento del trabajo, envíen al graduado con el cultivador del derecho procesal o, por lo menos, recaben su asesoramiento.

Niceto ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO